



Rama Judicial  
República de Colombia

## JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BUCARAMANGA

Bucaramanga, trece (13) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

### ACCIÓN DE TUTELA

RADICADO No. 680014105002-2023-00308-00  
ACCIONANTE: JOSE LUIS CARVAJAL GUTIERREZ C.C. 19.438.876  
ACCIONADO: BANCO DAVIVIENDA S.A.  
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.  
ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

#### 1. ASUNTO A DECIDIR

En desarrollo del Art. 86 de la Carta política y de conformidad con el procedimiento consagrado en el Decreto 2591 de 1991, procede el Despacho a emitir Sentencia de Primera Instancia en lo que en Derecho corresponda dentro de la **Acción de Tutela** radicada al número 680014105002-2023-00308-00, instaurada a través de apoderado judicial por el señor **JOSE LUIS CARVAJAL GUTIERREZ** identificado con C.C. 19.438.876 actuando en causa propia, en contra de **BANCO DAVIVIENDA S.A.** y **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.**, por considerar vulnerado su derecho fundamental de **PETICION**.

#### 2. HECHOS

Manifestó el accionante que desde el 14 de junio de 2023 radicó un derecho de petición ante el BANCO DAVIVIENDA S.A. solicitando que se informe si el señor JOSE ROBERTO CARVAJAL ESTEBAN (Q.E.P.D.) adquirió un CDT dentro

del plan financiero DAVIVALORES y de ser afirmativa la respuesta se indique el calor del CDT, los intereses a la fecha, termino y trámites para solicitar la entrega del mismo.

A la fecha de radicación de este trámite, el accionante no había recibido respuesta de fondo al respecto.

### 3. PETICIONES

Tutelar los derechos fundamentales invocados y ordenar al BANCO DAVIVIENDA S.A. dar respuesta de fondo al derecho de petición de 14 de junio de 2023 radicado por el accionante.

### 4. ACTUACIÓN JUDICIAL

Una vez asumido el trámite se admitió la acción de tutela mediante auto de fecha 1 de septiembre de 2023 y se ordenó correr traslado a los accionados a fin de que dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la respectiva comunicación se pronunciaran al respecto.

La accionada **BANCO DAVIVIENDA S.A.** describió traslado de la acción de tutela en los siguientes términos:

*“procedimos a dar respuesta a la petición el día 07 de septiembre de 2023, la cual fue enviada a la dirección de correo electrónico... indicado en el escrito de tutela.*

*Así las cosas, y teniendo en cuenta que los motivos que originaron la presente acción han sido atendidos, que la respuesta al derecho de petición presentado por el accionante ha sido de fondo, completa y concreta, solicito de la manera más respetuosa desestimar la acción de tutela por carencia actual de objeto por hecho superado.”*

Adjunto se aporta el escrito de la respuesta al derecho de petición de información interpuesto por el accionante donde se le indica que en efecto su progenitor tenía una cuenta de ahorros con el banco y respecto a los fondos de inversión debe solicitar la información a la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

En vista de lo anterior, mediante auto de 11 de septiembre se vincula a la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. al presente diligenciamiento otorgándosele el término de un (01) día para descorrer traslado, aportando pronunciamiento de forma oportuna en los siguientes términos:

*“...en primer lugar cabe destacar que mi representada dentro de la naturaleza de su licencia como entidad de servicios financieros, no ofrece los productos financieros que los establecimientos bancarios pueden realizar como lo es el Banco Davivienda. Si bien Fiduciaria Davivienda pertenece al grupo del Banco Davivienda, entre las mismas se predica que son instituciones financieras distintas dado que sus licencias otorgadas por la SFC son totalmente distintas.*

*Nótese señor Juez como las sociedades fiduciarias son aquellas entidades de servicios financieros, sometidas a la vigilancia de la Superintendencia, las cuales podrán, en desarrollo de su objeto social, realizar, entre otras las siguientes actividades:*

- *Tener la calidad de fiduciarios*
- *Celebrar encargos fiduciarios que tengan por objeto la realización de inversiones, la administración de bienes o la ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento de garantías por terceros para asegurar el cumplimiento de obligaciones, la administración o vigilancia de los bienes sobre los que recaigan las garantías y la realización de las mismas.*
- *Obrar como representante de tenedores de bonos*
- *Prestar servicios de asesoría financiera.*
- *Realizar operaciones de fideicomiso de inversión.*

*Contrario a los establecimientos bancarios, que son instituciones financieras cuya principal actividad es la captación de recursos en cuentas corrientes y otros depósitos a la vista o a término, con el principal objetivo de efectuar operaciones activas de crédito.*

*En esta medida, atendiendo a la solicitud realizada por el accionante, en la que solicita información de los productos tales como CDTs, mi representada se encuentra imposibilitada a dar información respecto de dichos productos de ahorro.*

*Ahora bien, de cara a la respuesta otorgada por Banco Davivienda, si bien a la fecha el accionante no ha dirigido hacia mi representada algún derecho de petición que se encuentre encaminado a conocer, si el señor José Roberto Carvajal tiene productos con esta, mediante la presente contestación se pone de presente que **a la fecha el señor José Carvajal no tiene productos que lo vinculen con Fiduciaria Davivienda.***

*Por todo lo anterior, es evidente que mi representada no tiene relación frente a la vulneración al derecho de petición y por ende debe ser desvinculada que la presente acción de tutela.”*

## 5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

La acción de tutela ha sido concebida como un mecanismo preferente y sumario para la defensa inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, lo cual implica que su efectividad radica en la posibilidad de que el Juez, si encuentra que en realidad existe la vulneración o la amenaza alegada por quien pide protección, imparta una orden para que aquel contra quien se intenta la acción actúe o se abstenga de hacerlo.

Corresponde al Despacho determinar si alguno de los accionados o vinculados ha vulnerado el derecho de petición de la accionante JOSE LUIS CARVAJAL GUTIERREZ y si a la fecha su solicitud de 14 de junio de 2023 se resolvió o no de fondo.

### DE LA LEGITIMACIÓN EN LA ACCIÓN DE TUTELA

Uno de los requisitos para analizar de fondo la procedibilidad de la acción de Tutela corresponde a la legitimación tanto por la parte accionante para interponer la acción que es equivalente a la legitimación por activa, la

legitimación de la parte accionada para asumir el conocimiento de la situación que se suscita por la parte actora o legitimación por pasiva, como la legitimación del juez para conocer de las presentes diligencias.

### **De la legitimación del Juez de conocimiento para asumir el conocimiento de las diligencias.**

La acción de tutela se estableció en el artículo 86 de la actual Constitución Política de 1991, como el medio más expedito y rápido para hacer cesar las acciones u omisiones que vulneran o amenazan un derecho fundamental; pero, se presenta como un instrumento de naturaleza subsidiaria y residual, es decir, sólo procede en ausencia de otros mecanismos adecuados de defensa, con la finalidad de otorgar protección inmediata a los derechos constitucionales fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de la autoridad pública o de los particulares.

En este evento la queja va dirigida contra BANCO DAVIVIENDA S.A. y FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., y frente al artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 y Artículo 1 Decreto 1983 de 2017, se advierte claramente que es procedente esta acción contra estas personas, siendo este Despacho competente para resolverla, teniendo en cuenta que el domicilio de la parte accionante se encuentra localizado en Bucaramanga, y por tanto al esperar una respuesta a su petición es en el lugar de su domicilio donde se están causando los efectos de la vulneración a su derecho fundamental.

### **De la legitimación por activa.**

En el presente caso concurre el señor JOSE LUIS CARVAJAL GUTIERREZ actuando en causa propia a solicitar la defensa de su derecho fundamental PETICION lo que deja en evidencia que se cumple el requisito de la legitimación por activa, al haberse interpuesto este mecanismo constitucional por el directo interesado.

### **De la legitimación por pasiva.**

La parte pasiva en el presente tramite se encuentra conformada por BANCO DAVIVIENDA S.A. y la sociedad vinculada para lo de su cargo FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., de manera tal que al haberse radicado ante esas personas el derecho de petición objeto de estas diligencias, se encuentran legitimadas por pasiva para emitir un pronunciamiento de fondo al respecto.

## DE LA NATURALEZA SUBSIDIARIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

El artículo 86 del Decreto 2591 de 1991 indica la naturaleza subsidiaria de la acción de Tutela, la cual procede por regla general solo cuando se han agotado los medios legales pertinentes.

Ahora bien, de conformidad con lo señalado en Sentencia C-132 de 2018, con Magistrado Ponente: Dr. ALBERTO ROJAS RIOS:

*“El inciso tercero de este artículo consagra el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, se trata de una condición de procedibilidad del mecanismo concebido para la adecuada y eficaz protección de los derechos fundamentales. En desarrollo del artículo 86 superior, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991, establece que la acción de tutela será improcedente cuando existan otros medios de defensa judicial eficaces para resolver la situación particular en la que se encuentre el solicitante.*

*(...)*

*La Corte ha reiterado, entonces, que la acción de tutela procede cuando se han agotado los mecanismos de defensa judicial ordinarios; sin embargo, existen situaciones en las que puede demostrarse la ocurrencia o amenaza de un perjuicio irremediable, razón por la que resulta urgente la protección inmediata e impostergable por parte de las autoridades correspondientes para evitar la afectación de un bien jurídicamente protegido. Sobre esta materia recientemente la Corporación ha expresado:*

*“En este sentido, la Corte ha determinado que la acción de tutela no procede como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, evento en el que el juez de tutela únicamente podrá suspender la aplicación del acto administrativo mientras se surte el respectivo proceso ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa (artículos 7 y 8 del Decreto 2591 de 1991).<sup>1</sup>*

*De conformidad con lo anterior, se tiene que en este último evento, la persona que solicita el amparo deberá demostrar de forma suficiente la necesidad de la medida para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, cuyos elementos han sido fijados por la*

*jurisprudencia constitucional de la siguiente manera: (i) que se esté ante un perjuicio inminente o próximo a suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”<sup>2</sup>*

*4.10. Como se observa, desde sus inicios hasta la actualidad la Corte Constitucional ha enseñado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, según sus pronunciamientos a pesar de la existencia de otros mecanismos judiciales llamados ordinarios es posible acudir al medio excepcional previsto en el artículo 86 superior, como ocurre cuando se trata de actos administrativos bien sean éstos subjetivos o de carácter impersonal, siempre y cuando los instrumentos judiciales comunes u ordinarios no cumplan con los criterios de eficacia e idoneidad requeridos para la adecuada protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados.”*

Así las cosas, al encontrarnos frente al derecho fundamental de petición, se torna comprensible que la parte actora hubiere acudido de forma primigenia a la acción de Tutela con miras a procurar la defensa de su derecho fundamental toda vez que de acudir a otra vía judicial se tendría que ver sometida a demoras injustificadas, que solo desgastaría el aparato judicial, lo que convierte a la tutela en la mejor opción para obtener una respuesta de fondo a sus requerimientos, sin tener que acudir al desgaste de un proceso ordinario ni verse obligada a incurrir en gastos procesales.

## **DE LA INMEDIATEZ EN LA ACCIÓN DE TUTELA**

En Sentencia T-246 de 2015 Magistrado Ponente: MARTHA VICTORIA SACHICA MÉNDEZ se analiza el criterio de inmediatez en la acción de tutela determinando lo siguiente:

*La Sentencia SU-961 de 1999<sup>3</sup> dio origen al principio de la inmediatez, no sin antes reiterar, como regla general, que la posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo significa que esta no tiene un término de caducidad. La consecuencia de ello es que el juez constitucional, en principio, no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo...*

*A partir de estas consideraciones, la Sala Plena infirió tres reglas centrales en el análisis de la inmediatez. En primer término, la inmediatez es un principio orientado a la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una regla o término de caducidad, posibilidad opuesta a la literalidad del artículo 86 de la Constitución. En segundo lugar, la satisfacción del requisito debe analizarse bajo el concepto de plazo razonable y en atención a las circunstancias de cada caso concreto<sup>4</sup>. Finalmente, esa razonabilidad se relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su vez la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental.*

*(...)*

*Empero, la acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual<sup>5</sup>.*

*En ese orden de ideas, de acuerdo con las reglas fijadas por la jurisprudencia constitucional y las interpretaciones garantistas efectuadas sobre este principio, no se desprende la imposición de un plazo terminante para la procedencia del amparo, sino uno razonable y prudente que debe ser verificado por el juez, de acuerdo a las circunstancias fácticas y jurídicas que rodean cada caso en concreto, máxime si el establecimiento de un plazo perentorio para interponer la acción de tutela implicaría el restablecimiento de la caducidad, con efectos contraproducentes sobre principios que inspiran la filosofía de la Constitución de 1991, tales como: i) el acceso a la administración de justicia; ii) la prevalencia del derecho sustancial sobre el*

formal; iii) la autonomía e independencia judicial; iv) la primacía de los derechos de la persona y; v) la imprescriptibilidad de los derechos fundamentales.

(...)

*Del anterior recuento jurisprudencial, la Sala Octava concluye que no existe un término establecido como regla general para interponer la acción de tutela, ni siquiera cuando se trate de tutelas contra providencias judiciales. Así, el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que, “...en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”<sup>6</sup>.*

Visto lo anterior, queda claro para este fallador que la parte actora cumple a cabalidad con el criterio de inmediatez al haberse interpuesto la acción de Tutela dentro de un término prudencial desde de la ocurrencia de la afectación a los derechos fundamentales de los cuales se invoca su protección.

## DE LA CARENCIA DE OBJETO EN LA ACCION DE TUTELA

Para abordar esta temática se trae a colación la Sentencia T-038 de 2019 con Magistrado Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER, en la cual se señalan las causales para que se dé la carencia actual de objeto en la acción de tutela:

*“La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendría algún efecto o simplemente “caería en el vacío”<sup>1</sup>. Específicamente, esta figura se materializa a través en las siguientes circunstancias<sup>2</sup>:*

---

<sup>1</sup> Corte Constitucional, sentencia T-519 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo) reiterada posteriormente en sentencias como la T-533 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y T-253 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), entre muchas.

<sup>2</sup> Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada) reiterada en la T-237 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otras. || La sentencia T-237 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), señaló: “(i) Por daño consumado se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y lo único que procede es el resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental. (ii) Por hecho superado cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, es decir, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. En este último evento, es necesario demostrar que en realidad se ha satisfecho por completo la pretensión de la acción de tutela, esto es, que

3.1.1. *Daño consumado. Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se materialice el peligro<sup>3</sup>. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional es improcedente cuando se ha consumado la vulneración<sup>4</sup> pues, esta acción fue concebida como preventiva mas no indemnizatoria.*

3.1.2. *Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante<sup>5</sup>. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado<sup>6</sup>.*

3.1.3. *Acaecimiento de una situación sobreviniente<sup>7</sup>. Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviniente, que a diferencia del escenario anterior, no debe tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho.”*

## DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION

Para abordar este Derecho se trae a colación lo expuesto en Sentencia T-206 de 2018, con Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO LINARES CANTILLO:

---

*se demuestre el hecho superado. Así las cosas, cuando se presente alguna de las dos circunstancias señaladas, el juez de tutela puede declarar, en la parte resolutive de la sentencia, la carencia actual de objeto y a prescindir de cualquier orden, con independencia de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991”.*

<sup>3</sup> Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada).

<sup>4</sup> Decreto 2591 de 1991, artículo 6: “La acción de tutela no procederá: // (...) 4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.”

<sup>5</sup> Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.

<sup>6</sup> Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]; estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

<sup>7</sup> La Corte empezó a diferenciar, a través de su jurisprudencia, una tercera modalidad de carencia actual de objeto cuando acaece un hecho posterior a la demanda. Por ejemplo las sentencias T-988 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-585 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-200 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada), T-481 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos), entre otras.

*“El derecho de petición, según la jurisprudencia constitucional, tiene una finalidad doble: por un lado permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. Ha indicado la Corte que “(...) dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado”<sup>8</sup>. En esa dirección también ha sostenido que a este derecho se adscriben tres posiciones<sup>9</sup>: “(i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”<sup>10</sup>.*

*9.1. El primer elemento, busca garantizar la posibilidad efectiva y cierta que tienen las personas de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y los particulares en los casos establecidos por la ley, sin que se puedan abstener de recibirlas y por lo tanto de tramitarlas<sup>11</sup>. Al respecto, la sentencia C-951 de 2014 indicó que “los obligados a cumplir con este derecho tienen el deber de recibir toda clase de petición, puesto que esa posibilidad hace parte del núcleo esencial del derecho”.*

*9.2. El segundo elemento implica que las autoridades públicas y los particulares, en los casos definidos por la ley, tienen el deber de resolver de fondo las peticiones interpuestas, es decir que les es exigible una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una de ellas; en otras palabras, implica resolver materialmente la petición. La jurisprudencia ha indicado que una respuesta de fondo deber ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no*

---

<sup>8</sup> Sentencia T-376/17.

<sup>9</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-951 de 2014.

<sup>10</sup> Los elementos han sido reseñados en las sentencias T-814/05, T-147/06, T-610/08, T-760/09, C-818/11, C-951/14, entre otras.

<sup>11</sup> Ver sentencias T-737/05, T-236/05, T-718/05, T-627/05, T-439/05, T-275/06, T-124/07, T-867/13, T-268/13 y T-083/17, entre otras.

*procedente”<sup>12</sup>. En esa dirección, este Tribunal ha sostenido “que se debe dar resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva”<sup>13</sup>*

*9.3. El tercer elemento se refiere a dos supuestos. En primer lugar, (i) a la oportuna resolución de la petición que implica dar respuesta dentro del término legal establecido para ello. Al respecto, la Ley 1755 de 2015 en el artículo 14 fijó el lapso para resolver las distintas modalidades de peticiones<sup>14</sup>. De dicha norma se desprende que el término general para resolver solicitudes respetuosas es de 15 días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud. La ausencia de respuesta en dicho lapso vulnera el derecho de petición. En segundo lugar, al deber de notificar que implica la obligación del emisor de la respuesta de poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo, con el fin que la conozca y que pueda interponer, si así lo considera, los recursos que la ley prevé o incluso demandar ante la jurisdicción competente. Se ha considerado que la ausencia de comunicación de la respuesta implica la ineficacia del derecho<sup>15</sup>. En ese sentido, la sentencia C-951 de 2014 indicó que “[e]l ciudadano debe conocer la decisión proferida por las autoridades para ver protegido efectivamente su derecho de petición, porque ese conocimiento, dado el caso, es presupuesto para impugnar la respuesta correspondiente” y, en esa dirección, “[l]a notificación es la vía adecuada para que la persona conozca la resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011”<sup>16</sup>.*

## 6. CASO EN CONCRETO

En el caso en concreto, pretende el accionante que se ordene a la entidad accionada que corresponda dar respuesta al derecho de petición radicado el 14 de junio de 2023 ante BANCO DAVIVIENDA S.A.

---

<sup>12</sup> Sentencias T-610/08 y T-814/12.

<sup>13</sup> Sentencia T-376/17.

<sup>14</sup> Tal disposición estableció: “Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: // 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. // 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. // Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

<sup>15</sup> Sentencia T-430 de 2017.

<sup>16</sup> Esta regla se encuentra enunciada en las sentencias T-249/01, T-1006/01, T-565/01 y T-466/04, entre otras.

Solicito el actor a través de una petición de información que se certifique si el señor JOSE ROBERTO CARVAJAL ESTEBAN (Q.E.P.D.) adquirió algún CDT con esa entidad en cuyo caso debería indicarse el saldo, intereses ganados a la fecha, término de efectividad del mismo y procedimiento a seguir para la entrega de los dineros a sus herederos.

El BANCO DAVIVIENDA S.A. por su parte dio respuesta a la petición el 7 de septiembre pasado informando al accionante que esa entidad no es la responsable de los certificados de depósito a término sino la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. la cual es una sociedad independiente.

La FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. en vista del anterior pronunciamiento, fue vinculada por este Despacho al presente tramite el 12 de septiembre pasado, poniéndole en conocimiento el expediente digital de la acción de tutela, lo que incluye el derecho el derecho de petición del accionante de 14 de junio de 2023 y la respuesta aportada por Banco Davivienda S.A.

En consecuencia, la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. recorrió traslado a grandes rasgos solicitando desvincularlos de este asunto puesto que el derecho de petición invocado por el actor fue radicado ante BANCO DAVIVIENDA S.A. y no ante esa entidad, sin embargo, en vista del pronunciamiento de BANCO DAVIVIENDA S.A. se indica que el señor José Carvajal no tiene productos que lo vinculen con Fiduciaria Davivienda. No se allega copia alguna de respuesta a derecho de petición dirigida al accionante.

Ahora bien, analizando en detalle el presente caso observa este fallador que en efecto existe un derecho fundamental afectado al accionante, el cual es el DERECHO DE PETICION, dado que no se ha recibido a la fecha una respuesta de fondo y concreta a su solicitud, la cual es muy puntual se basa en que se emita una certificación sobre CDT que hubiere adquirido su progenitor el señor JOSE ROBERTO CARVAJAL ESTEBAN (Q.E.P.D.) con BANCO DAVIVIENDA S.A.

Ahora bien, según respuesta emitida por BANCO DAVIVIENDA S.A. quedó descartada la competencia de esta compañía para emitir una respuesta de fondo; sin embargo, ello no los exonera de responsabilidad, puesto que no se aprecia que hubieren dado cumplimiento al deber de trasladar las diligencias al funcionario competente, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015:

*“ARTÍCULO 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.”*

De igual modo, la entidad vinculada FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. alegó no haber recibido un derecho de petición radicado por el accionante, lo que supuestamente le exonera de responsabilidad para dar respuesta de fondo al respecto, además de indicar se forma muy somera que el señor José Carvajal no posee productos que lo vinculen con la entidad; respuesta frente a la cual está en total desacuerdo el Despacho, puesto que si bien el accionante no radicó el derecho de petición inicial ante esa entidad directamente, ni BANCO DAVIVIENDA S.A. trasladó las diligencias para lo de su competencia, como debió ser de conformidad con el artículo 21 Ley 1755 de 2015, el Despacho desde el 12 de septiembre pasado le puso en conocimiento la petición lo que deja en evidencia su inexcusable desconocimiento del mismo.

Por consiguiente, ha de advertirse a la accionada FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. que si bien poseen un término legal para dar respuesta oportuna, de fondo y concreta a la solicitud del accionante dentro de los 15 días siguientes al momento en que el mismo fue puesto en conocimiento, esto es a partir del 12 de septiembre de 2023, ó 5 días para trasladar la competencia a la entidad que corresponda.

## **CONCLUSION**

Al no tener certeza de que la contestación de fondo a la solicitud de información de 14 de junio de 2023, radicado por el señor JOSE LUIS CARVAJAL GUTIERREZ identificado con C.C. 19.438.876 procede el amparo constitucional al derecho de petición invocado por la parte accionante.

Por consiguiente, se ordenará a en primer lugar a la accionada BANCO DAVIVIENDA S.A. trasladar las diligencias del derecho de petición de 14 de junio de 2023 a la entidad que corresponda resolver de fondo su solicitud dentro del término de cinco (05) días de conformidad con el artículo 21 Ley 1755 de 2015, teniendo en cuenta respuesta emitida por FIDUCIARIA

DAVIVIENDA S.A. según la cual se encuentra imposibilitada de dar información respecto de productos de ahorro CDTs.

De otro lado, se ordenará a FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. dar respuesta de fondo al derecho de petición interpuesto por el señor JOSE LUIS CARVAJAL GUTIERREZ identificado con C.C. 19.438.876 puesto en conocimiento por este Despacho el 12 de septiembre de 2023 dentro del término legal dispuesto para ello, es decir 15 días ó en caso de no ser competente se trasladen las diligencias a quien corresponda dentro de los 5 días subsiguientes, informando de ello al accionante a su correo electrónico.

Por lo anteriormente expuesto, el **JUZGADO SEGUNDO LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS DE BUCARAMANGA**—, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: TUTELAR** el derecho fundamental de PETICION del señor JOSE LUIS CARVAJAL GUTIERREZ identificado con C.C. 19.438.876, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: ORDENAR** a **BANCO DAVIVIENDA S.A.** trasladar las diligencias del derecho de petición de 14 de junio de 2023 interpuesto por el señor JOSE LUIS CARVAJAL GUTIERREZ identificado con C.C. 19.438.876, a la entidad que corresponda resolver de fondo su solicitud dentro del término de cinco (05) días de conformidad con el artículo 21 Ley 1755 de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO: ORDENAR** a **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.** dar respuesta de fondo al derecho de petición interpuesto por el señor JOSE LUIS CARVAJAL GUTIERREZ identificado con C.C. 19.438.876 puesto en conocimiento por este Despacho el 12 de septiembre de 2023 dentro del término legal dispuesto para ello, es decir 15 días a partir del conocimiento ó en caso de no ser competente para dar respuesta, se trasladen las diligencias a quien corresponda dentro de los 5 días subsiguientes, informando de ello al accionante a su correo electrónico.

**CUARTO: ADVERTIR** a las accionadas que una vez culminados los términos advertidos en los numerales anteriores, si no dan cumplimiento a la orden emitida por el Despacho, podría dar lugar a inicio de incidente de Desacato.

**QUINTO: ADVERTIR** a las partes que cuentan con el termino improrrogable de tres (03) días para solicitar impugnación de esta providencia, a partir del recibido de la notificación y si no es impugnada, envíese a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

El Juez,

A handwritten signature in black ink on a light gray rectangular background. The signature reads "CRISTIAN GARZÓN DÍAZ" in a cursive, stylized script.

CRISTIAN ALEXANDER GARZÓN DÍAZ